

RESISTIENDO EL AUTORITARISMO:

**NUESTRA LUCHA COLECTIVA EN CONTRA DE LA ESCALADA DE
ATAQUES DE TRUMP HACIA COMUNIDADES INMIGRANTES**

ABRIL 2025



**“ ¿Quién tiene el derecho a tener derechos?
Ciertamente no son los humanos aglomerados en las celdas acá. No es el hombre de Senegal que conocí que lleva un año privado de su libertad, su situación legal en limbo y su familia a un océano de distancia. No es la persona detenida de 21 años que conocí, quien puso pie en este país con 9 años de edad, solo para ser deportada sin ni siquiera una audiencia.. La justicia se escapa en las siluetas de los centros de detención de este país.. ”**

Mahmoud Khalil, [Carta de un prisionero político palestino en Louisiana](#) (18 de marzo de 2025)

En sus primeras semanas en el cargo, Donald Trump implementó numerosas órdenes ejecutivas y cambios de política antiinmigrantes, incluyendo ataques al derecho a la ciudadanía por nacimiento, la expansión de la colaboración entre el ICE y la policía, la detención migratoria y la cancelación del estatus de protección para múltiples grupos. Tras esta oleada inicial de acciones, la administración Trump intensificó sus ataques contra las comunidades inmigrantes de una manera cada vez más ilegal, lo que indica un autoritarismo creciente. Desde el descarado secuestro y la detención de estudiantes y profesores universitarios bajo el pretexto de una autoridad inaplicable en política exterior creada durante la Guerra Fría, hasta el uso de directivas en tiempos de guerra para enviar ilegalmente a inmigrantes venezolanos y salvadoreños a una mega prisión en El Salvador, la guerra de la administración Trump

contra los inmigrantes ha alcanzado nuevas y profundas cimas.

El gobierno está utilizando los sistemas de inmigración, derecho penal y seguridad nacional para hacer un blanco para la deportación al máximo número de personas en todos los ámbitos de la vida pública. Siempre se han utilizado acusaciones de criminalidad para justificar la violencia estatal, desde la Ley de Esclaves Fugitivos de 1850 hasta ejemplos actuales de muertes a manos de la policía durante controles de tráfico u otros altercados. Sin embargo, la palabra “criminal” es [una trampa retórica](#). Toda persona merece dignidad. Toda persona tiene derecho al debido proceso y a la seguridad, y ningún ser humano debería ser enviado a un campo de tortura. Cuando empezamos a discriminar a algunas personas como merecedoras de encarcelamiento y deportación, abrimos una puerta que el gobierno ha abierto de par en par. Pronto se romperá definitivamente y menos personas se librarán de ser blanco de ataques. Y la forma en que este gobierno está llevando a cabo esta purga, sin controles ni rendición de cuentas, indica un desmantelamiento de la democracia en sí.

Es abrumador monitorear todas las tácticas que esta administración está implementando para atacar a los inmigrantes. En este documento, intentamos resumir algunas de las principales maneras en que la administración Trump está modificando sus políticas y prácticas para vigilar, arrestar, detener, deportar y silenciar a inmigrantes y a quienes

les apoyan. No mencionamos cada cambio; más bien, nos centramos en la instrumentalización del sistema judicial penal, su enfoque cada vez más autoritario y el papel del presupuesto federal, herramientas clave de la brutalidad de la administración Trump y espacios vitales de incidencia política para frenar la ola de violencia.

USANDO EL SISTEMA CRIMINAL

LEGAL PARA ACELERAR LA RED DE

ARRASTRE MIGRATORIA

El perfilamiento racial se ha integrado sistemáticamente en como actúan las fuerzas policiales en Estados Unidos durante siglos, y la fusión de los sistemas penales y migratorios solo ha fomentado la discriminación racial. El sistema penal no solo se utiliza para identificar y detener a más personas, sino que también se aprovecha para hacer “deportables” a más personas que antes no lo eran, lo que intensifica la red de arrastre migratorio.

La expansión exponencial de 287(g):

Durante años, el movimiento por los derechos migrantes ha exigido la eliminación de programas de control migratorio como el [287\(g\)](#), que entrelazan la aplicación de la ley con la policía local. Involucrando a la policía local en la aplicación de leyes migratorias fomenta aún más la discriminación racial y somete a las personas racializadas a detenciones, arrestos y controles policiales inconstitucionales. Programas como el 287(g) canalizan a las personas hacia las vías que llevan del arresto a deportación y contribuyen

a impulsar la agenda de deportación masiva de Trump. En los primeros meses de la administración Trump, el programa 287(g) se ha expandido [exponencialmente](#), y estados como [Texas y Florida](#) exigen que las localidades participen en los 287(g). En enero de 2018, 59 jurisdicciones contaban con acuerdos 287(g); a partir de abril de 2025, existen 456 acuerdos 287(g) vigentes en 38 estados. El crecimiento masivo del 287(g) cambiará la forma en que las comunidades inmigrantes y todas las comunidades racializadas experimentan la actividad policial, ya que otorga una mayor licencia, directamente del presidente, para la discriminación racial.

Usando la cruel táctica de registro como una herramienta para aplicar leyes:

La administración Trump ha puesto en marcha planes para implementar un proceso de [registro](#) mediante el cual la mayoría de personas de comunidades inmigrantes deberán “registrarse” ante el gobierno federal, bajo amenaza de enjuiciamiento penal. Este proceso constituye una táctica flagrante para la aplicación de leyes migratorias y la discriminación racial a gran escala. El proceso recientemente anunciado evoca la última vez que se utilizó el registro en 2002 para el Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas (NSEERS por sus siglas en inglés), un programa de discriminación racial infame y desacreditado. Más de 80.000 hombres, principalmente musulmanes y árabes, se registraron bajo el NSEERS, desperdiciando enormes recursos y sin obtener [ningún beneficio](#) tangible. Como resultado, muchos miembros de la comunidad fueron detenidos y deportados, mientras que otros vivieron con el temor de

ser perseguidos en mayor medida. En lugar de mantener un programa tan perjudicial en la historia, Trump ha revivido el registro para impulsar su agenda de deportaciones masivas.

Priorizando procesamientos federales punitivos de inmigración: Trump ha pedido [priorizar el enjuiciamiento](#) de personas por violaciones migratorias. [Las leyes que castigan penalmente la migración](#) en sí fueron defendidas inicialmente por [Coleman Blease](#), un supremacista blanco impenitente que favorecía los linchamientos y que en una ocasión dijo “¡Al diablo con la Constitución!”. Tal como pretendía, estos enjuiciamientos ahora fomentan la [discriminación racial](#) y someten a las personas a penas punitivas de prisión federal, además de la detención y deportación. Estos enjuiciamientos fueron el eje central de la política de [separación familiar](#) de la primera administración Trump, violan sistemáticamente las protecciones del debido proceso, son uno de los principales contribuyentes a la crisis de encarcelamiento masivo en Estados Unidos y son inhumanos. Además, la administración ha [ordenado](#) al Departamento de Justicia que desvíe gran parte de su personal y recursos, y ha ordenado el enjuiciamiento de inmigrantes por actos como no registrarse o no portar sus documentos de inmigración; el enjuiciamiento de quienes asisten a inmigrantes por “albergar” o “transportar” a sus vecinos y seres queridos; y el enjuiciamiento de funcionarios públicos locales por “obstrucción” por intentar proteger a sus residentes inmigrantes.

Expandiendo la detención obligatoria: La primera ley que Trump firmó este año, la Ley Laken

Riley, obliga al ICE a arrestar y detener, sin fianza, a una amplia gama de inmigrantes acusados o arrestados por ciertos delitos. Esto representa una intensificación de las leyes de detención obligatoria [aprobadas en 1996](#) y propicia que las fuerzas policiales actúen basadas en el perfilamiento racial. Un arresto puede resultar en meses o años de detención migratoria mientras una persona litiga por un caso de inmigración. Esta ley aumentará drásticamente el número de personas detenidas por ICE y costará a los estados cientos de millones de dólares mantener a las personas en prisión preventiva.

USANDO TÁCTICAS AUTORITARIAS

PARA SECUESTRAR, DETENER,

DEPORTAR Y GENERAR MIEDO

La aparente meta de esta administración es actuar al margen de la ley en la medida que pueda y saquear hasta el último dólar posible de importantes funciones gubernamentales como la salud, la educación y la lucha contra la catástrofe climática, para revocarles a las personas su estatus migratorio legal o impedirles obtenerlo. Estas tácticas autoritarias buscan que todas las personas, tanto inmigrantes como ciudadanos, teman criticar las acciones de la administración y ejercer su derecho a la libertad de expresión, bajo amenaza de cargos penales, deportación o desfinanciamiento de su organización o ciudad.

Externalizando la detención y deportación a otros países: Por diseño, la deslocalización de la detención y la deportación evade la rendición de cuentas, hace desaparecer a

personas (“ojos que no ven, corazón que no siente”) e invoca clichés racistas asociados con las campañas de la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra el terrorismo” que deshumanizan a los inmigrantes y justifican las violaciones y abusos sistémicos de los derechos humanos. Esto incluye:

- **Invocando la ley de Guerra de 1798 para encarcelar indefinidamente a personas en una famosa prisión salvadoreña:** El gobierno deportó a más de 250 personas y pagó para que un dictador autoproclamado les encarcelara indefinidamente en una prisión de mala reputación en El Salvador. Lo hizo bajo pretexto de etiquetarlas como “pandilleros” venezolanos o salvadoreños, [incluso invocando falsamente la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial](#) y violando la orden de un juez federal. La “clasificación de pandillas” por parte de [ciudades, estados](#) y el gobierno federal está plagada de factores arbitrarios y racistas: por ejemplo, los [criterios](#) del gobierno para etiquetar a las personas como pandilleros se centraron principalmente en la ropa deportiva y los [tatuajes comunes](#) que lucían las personas, desde equipos de [fútbol](#) hasta la aceptación del autismo y rosas. Al menos una persona, [Kilmar Abrego García](#), fue deportada debido a un “error administrativo” reconocido. Estos secuestros-deportaciones se han calificado como [trata de personas](#) dada la reputación de la prisión de practicar tortura y trabajos forzados. Además, el gobierno también ha expresado su deseo de crear una colonia penal en El Salvador para

[ciudadanos estadounidenses](#) con condenas penales. El gobierno está reafirmando el derecho a recluir a residentes de este país en prisiones extranjeras sin el debido proceso, fundamento de nuestro orden constitucional. Además, afirma que, al haberse deshecho de la custodia, no hay [nada](#) que se pueda hacer. Esto debería ser impactante no solo para los jueces, sino también para la idea de libertad que los estadounidenses dicen valorar.

- **Expandiendo la Bahía de Guantánamo:** El gobierno de Trump inició la práctica sin precedentes de trasladar migrantes desde territorio estadounidense para detenerlos en la [Bahía de Guantánamo](#), un lugar de terribles abusos y torturas que abarca desde la [detención masiva de refugiados haitianos en 1991](#) hasta los crímenes de guerra cometidos contra [hombres y niños musulmanes](#), víctimas de la “Guerra contra el Terror”. El gobierno propuso detener hasta 30.000 personas en la Bahía de Guantánamo, lo que por sí solo casi duplicaría la capacidad total de detención actual.

Haciendo un blanco de la disidencia y la protesta: Al atacar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y protesta, la administración Trump ha enviado un mensaje alarmante: cualquier persona o institución que no esté de acuerdo con la administración será perseguida. Entre las afectadas se incluyen:

- **Estudiantes y profesores** quienes se han atrevido a expresar su apoyo a un alto el fuego de los bombardeos israelíes en Gaza o a un cambio en la política exterior estadounidense,

y han abogado contra la hambruna, la destrucción y el genocidio de los palestinos. Agentes de ICE, enmascarados y vestidos de civil, han secuestrado a [estudiantes y profesores](#) con [tarjetas de residencia](#) y [visas de estudiante](#) de sus edificios de apartamentos y comunidades, y les han trasladado a [centros de detención migratoria lejanos](#).

- **Líderes de justicia para inmigrantes con años de experiencia**, quienes se han pronunciado en contra de las injustas políticas migratorias del gobierno y a favor de una reforma migratoria. Como muchos otros, han sido secuestrados de sus [lugares de trabajo](#), de sus [autos](#) y mientras se [registraban](#) para sus citas programadas con ICE.
- **Ciudades santuario**, que han sido [amenazadas](#) con enjuiciamiento civil y penal de funcionarios electos, así como con recortes de fondos. Estas amenazas buscan coaccionar a las localidades para que participen en detenciones y deportaciones masivas, precisamente porque las [políticas de santuario](#) han sido eficaces.
- **El sector legal e instituciones que están retando al gobierno** como [abogados de inmigración](#) que representan a sus clientes, defensores que educan a las comunidades sobre sus derechos constitucionales, [bufetes de abogados](#) y [jueces](#).

Haciendo un blanco de personas en todas partes: Al realizar redadas de ICE cerca o en espacios seguros que tradicionalmente han estado exentos de las medidas de control migratorio, la administración está haciendo

que todos los ámbitos de la vida pública sean inseguros. Por ejemplo, ICE rescindió [una política de larga data](#) que protege áreas sensibles como escuelas y lugares de culto de sus acciones. La Patrulla Fronteriza ha [intentado](#) acceder a niños de primaria con el pretexto de “controles de bienestar”. Se ha difundido la noticia de la presencia de autoridades de inmigración en dichos lugares, lo que ha provocado que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela o rezar en sus iglesias, mezquitas y templos. ICE y CBP han comenzado de nuevo a realizar redadas en [lugares de trabajo](#) y [estacionamientos](#), deteniendo a varias personas a la vez, a veces [ciudadanos estadounidenses](#). Además, existe un mayor peligro en lugares de viaje, aeropuertos y fronteras donde las personas están sujetas a un mayor escrutinio, lo que resulta en que más personas sean canalizadas al sistema de detención migratoria. La administración Trump también ha expresado su [intención de restablecer una “prohibición musulmana”](#), impidiendo el ingreso de personas de varios países (que se espera sean países de mayoría musulmana o países que no le facilitan a Estados Unidos someter a sus ciudadanos a deportaciones injustas)..

FINANCIANDO LA DETENCIÓN

MASIVA Y APLICACIÓN DE LEYES

COSTA DE LAS COMUNIDADES

Estados Unidos opera el sistema de [detención de inmigrantes](#) más grande del mundo y está destinando más fondos públicos a la [aplicación](#)

[de las leyes migratorias](#) que nunca antes.

Este es un fenómeno relativamente nuevo, producto de la legislación y las políticas bipartidistas que a lo largo de los años han destinado enormes recursos federales a una vigilancia policial racializada, la vigilancia de las comunidades inmigrantes y la intensificación de la militarización de la frontera. El presupuesto anual general de ICE aumentó de \$3.400 millones de dólares en 2004 a casi \$10.000 millones de dólares actualmente. El presupuesto de CBP aumentó durante el mismo período de \$4.900 millones de dólares a más de \$16.000 millones de dólares. El aumento de la financiación para la aplicación de las leyes ha fortalecido la infraestructura para la detención masiva, los arrestos generalizados y selectivos, y las deportaciones a gran escala. Se espera que una mayor expansión, incluyendo más de las alarmantes acciones documentadas aquí, se financie a costas de los servicios y programas básicos para todos los estadounidenses.

Incentivos financieros perversos para la detención masiva y la deportación: Los beneficiarios principales de este régimen exagerado de aplicación de la ley son las prisiones privadas, los contratistas militares y de seguridad. La industria de control fronterizo se estimó en \$48 mil millones en 2022 y se [proyecta que crezca](#) por \$81 mil millones para 2030. El complejo sistema de aplicación de la ley incluye un sistema de [puertas giratorias](#) donde los funcionarios se lucran con el encarcelamiento masivo. Las empresas gastan [millones](#) cada año

presionando al Congreso, incluyendo a aquellas con vínculos a funcionarios de nivel ministerial. La [fiscal general de Trump, Pam Bondi](#), fue cabildera de la empresa de prisiones privadas [GEO Group](#), que donó más de un millón de dólares a la reelección de Trump. El director ejecutivo de la otra gran empresa de prisiones privadas, CoreCivic, dice que esperan el “[crecimiento más significativo](#)” en la historia de su empresa en los próximos años. Con el gobierno de Trump levantando la prohibición de la era Biden sobre los [contratos de prisiones privadas](#), estas empresas buscan lucrarse tanto con las nuevas prisiones operadas por compañías privadas como con los nuevos contratos de detención de ICE. La administración de Trump ya ha firmado nuevos contratos, incluyendo para la [detención de familias](#), guardias para detener ilegalmente a personas en la Bahía de Guantánamo, Cuba, [vuelos de deportación](#), y busca expandirse a [bases militares](#). ICE también publicó una convocatoria para “[Detención de Emergencia y Servicios Relacionados](#)”, que podría invertir hasta \$45 mil millones en dos años en nuevas cárceles de ICE y servicios relacionados, y publicó un aviso para la [adjudicación de nuevos contratos](#), eludiendo el proceso de licitación pública federal.

Detención masiva y deportación a costas de necesidades comunitarias básicas:

La financiación para las detenciones y deportaciones masivas se realizan a expensas de las necesidades básicas de la comunidad. El proyecto de ley que el Congreso aprobó en [marzo de 2025](#) para mantener la financiación

del gobierno hasta septiembre de 2025 aumentó la financiación para las detenciones y las deportaciones masivas por \$500 millones de dólares, a la vez que cedía la autoridad para dirigir el gasto de las agencias, otorgando a la administración Trump un cheque en blanco para desviar recursos de la atención médica y la educación.unacceptable.

El proceso presupuestario como un punto crítico de intervención: La [Cámara de Representantes](#) y el [Senado](#) han pasado resoluciones presupuestarias como parte del [proceso de reconciliación](#), proponiendo canalizar cientos de miles de millones de dinero de nuestros impuestos para impulsar las deportaciones masivas, extender los recortes de impuestos para multimillonarios, mientras desfinancian programas como Medicaid. Cuando lleguen a un acuerdo, el Congreso buscará pasar una propuesta de ley que solo requiere una mayoría simple de votos para ser aprobada en la Cámara y el Senado. El Congreso debe escuchar del público que impulsar la agenda autoritaria de esta administración, pagada con el recorte de servicios esenciales para familias, es inaceptable.

¿QUÉ PUEDE HACER USTED?

Exija que sus representantes locales en el Congreso bloqueen los fondos destinados a la detención masiva y la deportación, y expresen su apoyo firme e inquebrantable a las comunidades inmigrantes. Se debe instar a les

Congresistas a que se [pronuncien](#) en contra de la propuesta de reconciliación presupuestaria e insten a sus colegas a votar en contra de cualquier proyecto de ley que ponga en riesgo el acceso a Medicaid y a la alimentación infantil, y que cree lagunas legales para la clase multimillonaria de donantes de Trump. Con la financiación gubernamental del año fiscal 2025 resuelta hasta septiembre de 2025, les Congresistas deben centrarse en las propuestas de financiación del año fiscal 2026 y utilizar el proceso de asignación de fondos para proteger servicios vitales y oponerse a la agenda cada vez más ilegal de Trump. Utilicen esta [petición](#) y esta [acción](#) para contactar a les Congresistas y pedirles que se opongan a la financiación de la ofensiva de la administración Trump contra las comunidades inmigrantes.

Involúcrese en su comunidad. Use el kit de herramientas de [Comunidades Si, Jaulas No](#) para luchar en contra de la detención y deportación, cree o únase a un [programa de vigilancia en contra de ICE](#), o sea voluntarie en su organización de justicia inmigrante local. Apoye a personas que son blanco de la detención y deportación al donar a organizaciones comunitarias, unirse a un programa de visitas, o escribirle a las personas detenidas.

Siga a [Detention Watch Network](#), [Immigrant Defense Project](#), [Immigrant Legal Resource Center](#), y [National Immigrant Justice Center](#) para actualizaciones y otras formas de tomar acción.

